

como los avisos relativos a las subastas de sus proventos, serán publicados por dichos organismos municipales de acuerdo con los Reglamentos que deberán establecer al efecto.

Art. 2.—El período legal establecido para efectuar los procedimientos relativos a las subastas de proventos municipales, podrá ser modificado por razones de necesidad, mediante Resoluciones motivadas dictadas por los Ayuntamientos de los Municipios correspondientes.

Art. 3.—Queda modificada, en cuanto sea necesario, la Ley de Organización Municipal N° 3455, del 21 de diciembre de 1952.

DADA Y PROMULGADA en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, años 122° de la Independencia y 103° de la Restauración.

Publiquese en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

HECTOR GARCIA GODOY

Ley No. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
(G. O. N° 8950, del 18 de Octubre de 1965)

HECTOR GARCIA GODOY
Presidente Provisional de la República Dominicana
En Nombre de la República

NUMERO 36

VISTO: El Artículo 2 del Acto Institucional;
DICTO LA SIGUIENTE LEY SOBRE COMERCIO, PORTE
Y TENENCIA DE ARMAS;

CAPITULO I

DE LAS ARMAS DE FUEGO

Art. 1.—La expresión armas de fuego como se usa en esta Ley comprende fusiles, rifles, carabinas, revólveres, pistolas,

escopetas y todas las demás armas mortíferas con las cuales se pueda disparar balas y otros proyectiles por medio de pólvora o de otro explosivo.

PARRAFO I.—El cañón de cualquier arma de fuego se considera como arma completa para los efectos de la presente Ley.

PARRAFO II.—De estas armas se consideran armas de guerra las pistolas de calibre 45, los fusiles, ametralladoras, carabinas, rifles y las piezas de artillería, y demás armas pesadas, las que sólo pueden ser importadas y poseídas por el Gobierno de la Nación.

PARRAFO III.—A las pistolas calibre 38, los revólveres calibre 45 los revólveres calibre 44 y los revólveres "Magnum" 380 milímetros con las características de armas de guerra, solamente podrán otorgárseles licencias para la tenencia.

Art. 2.—Sólo lo que se permite en la presente Ley, se prohíbe a toda persona fabricar, importar, comprar o adquirir de cualquier modo, armas de fuego, piezas o partes sueltas, municiones o fulminantes para las mismas, o tenerlas en su poder o bajo su custodia, o venderlas o disponer de ellas en cualquier forma, o portarlas.

PARRAFO.—También están comprendidas en la prohibición las escopetas de pistón o cartuchos construídas exclusivamente para fines de caza y que disparen perdigones.

Art. 3.—Las escopetas, revólveres, pistolas, sus respectivas municiones y fulminantes (pistones) sólo podrán ser importados y usados por los particulares en la forma y condiciones determinadas por la presente ley.

CAPITULO II

DE LOS PARTICULARES Y MIEMBROS DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A POSEER Y PORTAR ARMAS

Art. 4.—El Presidente y el Vicepresidente de la República

tienen derecho absoluto al porte y tenencia de armas, sin ningún requisito.

PARRAFO.—Cuando estos funcionarios cesen en sus funciones gubernativas, tendrán derecho a portar o tener un arma.

Art. 5.—Los Jefes, Oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas legalmente constituidas, y los Jefes, Oficiales y agentes de la Policía Nacional tendrán derecho a tener en su poder o bajo su custodia las armas y municiones que les sean entregadas conforme a las regulaciones internas de los cuerpos armados y de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus deberes oficiales.

Art. 6.—Los Ministros y los funcionarios investidos con este rango, el Presidente y demás jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los Senadores y Diputados, los Viceministros, los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, los Procuradores Fiscales y demás miembros del Ministerio Público, los Jueces de los tribunales, los Jueces de Instrucción, Gobernadores Civiles de Provincias, los Alcaldes Municipales y Alcaldes Pedáneos, tienen derecho a poseer y portar armas.

Art. 7.—El Presidente de la República podrá autorizar la tenencia y porte de armas a aquellos funcionarios y empleados administrativos, judiciales o municipales que a su juicio deben poseerlas.

Art. 8.—En los casos que considere de interés público, el Presidente de la República podrá autorizar a cualquier persona la tenencia y porte de cualquier tipo de armas. Esta tenencia es provisional y estará sujeta a revocación cuando éste lo considere necesario.

Art. 9.—Ninguno de los funcionarios o empleados previstos en los artículos 6 y 7 podrá poseer más de un arma, excepto las que están destinadas a la caza.

Art. 10.—No incurren en las penas previstas en esta Ley

las personas que posean colecciones de armas consideradas como objetos históricos.

PARRAFO.— Sin embargo, estas personas estarán obligadas a comunicar al Ministerio de lo Interior y Policía una nómina de las armas que formen su colección, con una descripción completa de cada una de ellas. Este funcionario librará una constancia que permita al interesado demostrar el cumplimiento de esta formalidad.

Art. 11.—La provisión de armas a los Alcaldes Pedáneos correrá por cuenta de los Ayuntamientos, en sus correspondientes jurisdicciones.

Art. 12.—Todo Jefe Superior o Encargado de Organismo, Departamento o establecimiento de la Administración Pública, nacional o municipal, será personalmente responsable de la regularidad de las licencias oficiales que amparan la tenencia y porte de armas, por parte de los funcionarios y empleados bajo su dependencia autorizados de acuerdo con esta Ley, así como de la devolución de dichas armas cada vez que ocurren supresiones de cargos entre ellos.

PARRAFO I.— En consecuencia, quedan expresamente encargados de supervigilar el traspaso de las armas, en el caso de sustituciones, y de gestionar la expedición de las licencias correspondientes a los nuevos empleados, así como la cancelación de las que amparaban a los sustituidos, debiendo notificar el cambio oerado al Gobernador de la Provincia en que ejerzan sus funciones dichos empleados.

PARRAFO II.—Todo funcionario o empleado público que esté autorizado a portar o poseer un arma propiedad del Estado, estará obligado a pagar el importe de la misma en caso de pérdida o robo, cuando ocurra la pérdida por una falta que le sea imputable.

Art. 13.—Las personas indicadas en los artículos 6 y 7 quedan obligadas a someter al Ministerio de lo Interior y Policía la solicitud de licencia oficial correspondiente, inmediata-

mente después de asumidas sus funciones. Esta solicitud se hará en formulario que proveerá el Ministerio de lo Interior y Policía.

Art. 14.—Pueden portar armas los pagadores de las distintas dependencias gubernamentales, los hacendados los agentes viajeros y cobradores de empresas comerciales mientras estén en sus labores habituales o en ocasión de ellas, pero limitando su porte al tiempo que estén en las actividades del trabajo habitual.

Art. 15.—Toda persona podrá poseer un arma de fuego para la defensa personal y de sus intereses, siempre que llene los requisitos legales, y que a juicio del Ministro de lo Interior y Policía justifique la necesidad de su tenencia.

Art. 16.— No pueden portar ni tener armas de fuego las siguientes personas: a) los menores de dieciocho (18) años de edad; b) las personas que hayan padecido o estén padeciendo de enajenación mental o de epilepsia; c) los beodos habituales; d) las personas que han sido condenadas a penas aflictivas e infamantes o infamantes o a prisión temporal de más de un año por infracciones intencionales; e) los condenados por los delitos de robo, estafa, abuso de confianza, fulería y otros de igual naturaleza; y f) las personas que estén sometidas a la acción de la justicia, mientras estén subjudice y si se ha dictado mandamiento de prisión.

Art. 17.—Se requerirá a toda persona física o moral la obtención de licencia para importar o negociar en armas de fuego, piezas, municiones y fulminantes. La licencia consignará la cantidad máxima en valores representados por armas, piezas, municiones o fulminantes. Este valor se calculará a base del precio que conste en los documentos de compra.

La licencia será otorgada por el Ministro de lo Interior y Policía a solicitud del interesado.

Antes de resolver sobre dicha solicitud el Ministro de lo Interior y Policía podrá pedir cualquier informe que juzgue conveniente.

El Ministro de lo Interior y Policía puede discrecionalmente aprobar o desaprobar dicha solicitud, y en caso de que la apruebe, exigirá la fianza que ha de prestar previamente el solicitante, fijando el tiempo de su duración a menos que sea retirada antes por su autoridad.

Art. 18.—La fianza que debe prestar el solicitante, depositándola en el Tesoro Nacional, será de una suma igual al cincuenta por ciento (50%) del valor de las armas, municiones y fulminantes que se proponga importar para la venta; pero nunca podrá ser menos de cinco mil pesos oro (RD\$5,000.00).

Párrafo I.—La fianza prescrita en este artículo, será exigible en efectivo, o en inmuebles libres de todo gravámen que representen el doble del valor fijado en efectivo, o mediante cheques expedidos a favor de Tesorero Nacional certificado por un Banco radicado en el país o en cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Agrícola de la República Dominicana.

Párrafo II.—Dicha fianza responderá del fiel cumplimiento de las leyes y regamentos relativos al negocio para cuyo ejercicio se concede la licencia.

Párrafo III.—La licencia será comunicada por el Ministro de lo Interior y Policía al Ministro de las Fuerzas Armadas.

Art. 19.—Se requerirán fianzas adicionales para amparar válidamente cualquier existencia que exceda el límite de existencia consignado en la licencia original.

Art. 20.—Queda prohibida la venta y entrega de armas o parte de armas, municiones o fulminantes sin la previa comprobación de la existencia de permisos válidos para amparar dichas armas, partes de armas, municiones y fulminantes.

Art. 21.—Independientemente del registro de las operaciones contables en los libros exigidos por la ley a los comerciantes, las personas dedicadas al negocio de armas deberán llevar un libro especial registrado, foliado y rubricado por el Ministerio de lo Interior y Policía, por medio del cual se harán cons-

tar los nombres, edad, residencia, profesión, dirección postal número, serie y sello de la Cédula de Identificación Personal de las personas que le hubieren comprado armas de fuego, municiones y fulminantes; el número y fecha de la licencia de cada comprador; el número y clase de cada arma comprada, juntamente con la cantidad y naturaleza de las municiones y fulminantes para dicha arma de fuego.

PARRAFO.— Esas cuentas y registros se llevarán en su libro sin interlineas, raspaduras, ni enmiendas y sin dejar líneas en blanco.

PARRAFO II.—Todo comerciante en armas de fuego, cuando lo requiera el Ministro de lo Interior y Policía, o el Ministro de las Fuerzas Armadas, o las personas autorizadas por dichos funcionarios, está obligado a permitir el examen de dichos libros y registros y cuentas de compra venta de armas de fuego, y el recuento y comprobación de todas las armas, municiones y fulminantes en existencia. Cualquier negativa por parte del comerciante de cumplir las disposiciones del presente artículo, constituirá una infracción a esta Ley, que será castigada con la cancelación de la licencia.

Art. 22.—La persona física o moral que posea una licencia para comerciar en armas de fuego, deberá almacenar las armas, municiones y fulminantes en el arsenal del Estado, y donde no exista éste, en un local del Gobierno que esté bajo la custodia del Ejército Nacional o a falta de éste en la Policía Nacional. Al hacer este depósito el oficial encargado del arsenal o del local del Gobierno donde se depositen, dará un recibo que contenga una descripción de los efectos depositados, y al entregar éstos o parte de éstos para la venta, exigirá del dueño una constancia escrita de la entrega.

PARRAFO — Los comerciantes en armas están autorizados para tener en su establecimiento una cantidad de armas que no exceda de tres (3) revólveres, seis (6) escopetas, 100 (cien) cápsulas de revólver, mil (1,000) cartuchos de escopeta, diez (10) libras de pólvora fina, cien (100) libras de perdigones para las mismas y mil (1,000) fulminantes.

Art. 23.—Cuando un comerciante en armas disponga legalmente de todas las armas, municiones o fulminantes poseídas en virtud de una licencia y notifique al Ministerio de lo Interior y Policía su propósito de no continuar en ese negocio la fianza será devuelta a su dueño por orden de dicho Ministro.

CAPITULO IV

DE LAS LICENCIAS INDIVIDUALES PARA TENER O PORTAR ARMAS

Art. 24.—Toda persona que desee portar o tener un arma de fuego para los fines permitidos por la presente ley, y las municiones y fulminantes necesarios para la misma, deberá proveerse de la licencia correspondiente, solicitándola mediante las formalidades siguientes:

a) Cuando se trate de licencia para el porte de armas de fuego, para la defensa propia, o de sus intereses, el solicitante deberá pagar previamente en la Tesorería Nacional, la suma de RD\$200.00 (doscientos pesos) cada año, como valor de la licencia.

En caso de expedirse la licencia después de enero, el valor de la misma se calculará a razón de catorce pesos con dieciséis centavos (RD\$14.16) por cada mes o fracción de mes que faltare por transcurrir desde la fecha de solicitud hasta el próximo diciembre inclusive.

b) Cuando se trate de licencia para la tenencia de armas de fuego en su residencia, comercio, trabajo, industria, etc.; el solicitante deberá pagar previamente en la Tesorería Nacional a suma de cien pesos (RD\$100.00) cada año como valor de la licencia.

En caso de expedirse la licencia después de enero, el valor de la misma se calculará a razón de ocho pesos con treinta y tres (RD\$8.23) por cada mes o fracción de mes que faltare por transcurrir desde la fecha de solicitud hasta el próximo diciembre inclusive.

c) Cuando se trate de licencia para el porte de escopeta de cartucho para caza, el impuesto será de setenta y cinco pesos (RD\$75.00) por año calendario por cada escopeta de cualquier calibre.

En caso de expedirse la licencia después de enero, el valor de la misma se calculará a razón de seis pesos con veinticinco centavos (RD\$6.25) por cada mes o fracción de mes que faltare por transcurrir desde la fecha de solicitud hasta el próximo diciembre inclusive.

d) Cuando se trate de licencia para tenencia de escopeta de cartucho de cualquier calibre, para poseerla en su casa, industria, comercio, finca agrícola o ganadera, etc.; el impuesto será de cincuenta pesos (RD\$50.00) por año calendario.

En caso de expedirse la licencia después de enero, el valor de la misma se calculará a razón de cuatro pesos con diecisiete centavos (RD\$4.17) por cada mes o fracción de mes que faltare por transcurrir desde la fecha de solicitud hasta el próximo diciembre inclusive.

e) La licencia para uso de escopetas de pistón y rifles de aire comprimido estará sujeta a un impuesto de cinco pesos (RD\$5.00) cada año, pagadero en un sello de Rentas Internas de mismo valor.

f) Quedan liberados de todo impuesto las licencias expedidas a las personas consignadas en los artículos 6 y 7 de la presente ley.

Art. 25.—La solicitud de licencia particular para el porte o tenencia de armas de fuego, municiones o fulminantes, hecha en los formularios que para ello disponga el Ministerio de lo Interior y Policía se formulará en triplicado dirigidos a la Jefatura de la Policía o al Gobernador Civil de la jurisdicción, según que el solicitante tenga su residencia habitual en el Distrito Nacional o en Provincia, respectivamente, acompañada de cuatro fotografías recientes de su persona, y de certificaciones de no delincuencia expedidas por el Juez de Paz,

por el Jefe de la Policía de la jurisdicción, y por el Procurador General de la Corte de Apelación de su Departamento o del Procurador Fiscal de su Distrito, que evidencie que esa persona no ha sido condenada a penas aflictivas e infamantes o infamantes, o a prisión temporal de más de un año por infracciones intencionales o por delitos de robo, estafa, abuso de confianza, fullería y otros de igual naturaleza, o que no está sometida a la acción de la justicia o que se ha dictado en su contra mandamiento de prisión alguno. Además deberá acompañar su solicitud de un certificado médico que justifique que no ha padecido ni está padeciendo de enajenación mental o de epilepsia, ni que es un beodo habitual.

En el caso de que una misma arma vaya a ser usada por varias personas, en su calidad de guardianes, serenos o celadores de una industria, empresa o entidad comercial, agrícola o ganadera, se podrán expedir tantas licencias como personas vayan a portarla, una vez llenados los requisitos exigidos por esta ley.

Cuando una de las personas autorizadas a portar armas en estas condiciones deje de servir el cargo en cuya calidad le fué expedida la licencia, se cancelará ésta, pudiendo ser expedidas otra en favor de su sustituto, si lo hubiere y así se solicitare.

PARRAFO I.—Los formularios para solicitar licencia se venderán en las Colecturías de Rentas Internas a veinticinco centavos (RD\$0.25) debidamente sellados por el Colector y por el Ministerio de lo Interior y Policía. Fuera de este gasto, ninguna oficina cobrará otra suma por preparar, expedir y entregar las solicitudes y certificados.

PARRAFO II.—El Jefe de la Policía Nacional, o el Gobernador Provincial, según el caso, enviarán la solicitud al Ministerio de lo Interior y Policía, dentro del término de una semana, y este funcionario podrá aprobarla o desaprobarla.

PARRAFO III.—En caso de que la solicitud se contraiga a escopetas de pistón o rifles de aire comprimido, deberá estar

acompañada simplemente de una certificación de no delincuencia expedida por autoridad competente de la jurisdicción en que el solicitante tenga su residencia habitual. Además deberá acompañar su solicitud con un certificado médico que justifique que no ha padecido o está padeciendo de enajenación mental o de epilepsia, y de que no es un beodo habitual.

Art. 26.—Las licencias particulares vencen el 31 de diciembre del año para el cual fueron expedidas; pudiendo ser renovadas mediante solicitud hecha en los formularios que determine el Ministerio de lo Interior y Policía, previo pago del impuesto y por las vías indicadas para las solicitudes originales.

PARRAFO I.—El Ministro de lo Interior y Policía podrá admitir renovaciones hasta el 31 de enero. Pasada esa fecha y hasta el último día de febrero, el peticionario estará en la obligación de anexar al expediente de solicitud un sello de Rentas Internas por valor de RD\$20.00 (veinte pesos) cuando se trate de renovaciones de permisos de pistolas, revólveres o escopetas de cartucho; o un sello de Rentas Internas por valor de RD\$2.00 (dos pesos) si se trata de renovaciones concernientes a escopetas de pistón o rifles de aire comprimido. Dichos sellos serán cancelados en el formulario de solicitud.

PARRAFO II.—Transcurridos los plazos anteriormente indicados toda licencia que no haya sido renovada quedará automáticamente cancelada.

Art. 27.—Las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministro de lo Interior y Policía.

PARRAFO.—Al revocarse o cancelarse una licencia, o al expirar el plazo que la presente Ley concede para su renovación, todas las armas y municiones en poder del poseedor de la licencia se depositarán en un Arsenal del Estado, o en un local que esté bajo la custodia del Ejército o de la Policía Nacional y en tales casos dichas armas y municiones pasarán a ser propiedad del Estado.

Art. 28.—Toda persona provista de un permiso oficial para porte y tenencia de armas de fuego que desee obtener permiso particular a los mismos fines, deberá llenar las formalidades exigidas por esta ley.

Art. 29.—En los casos de destrucción o pérdida debidamente comprobada de licencias expedidas a particulares, éstos deberán solicitar inmediatamente, por la vía correspondiente la expedición de un duplicado, mediante el pago de diez (RD 10.00) pesos oro en la Tesorería Nacional.

PARRAFO.—La expedición de duplicado para licencia que amparen escopetas de pistón o rifles de aire comprimido, será efectuada mediante solicitud acompañada de un sello de Rentas Internas por valor de un peso (RD\$1.00).

CAPITULO V

REGLAS GENERALES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO

Art. 30.—En todos los casos en que armas amparadas por licencias expedidas de acuerdo con esta Ley sean tomadas o incautadas por las autoridades civiles, militares o policiales, dichas autoridades darán al expediente el curso correspondiente y apoderarán a los Tribunales de los diversos casos. Solamente los Tribunales podrán ordenar la confiscación de las armas en favor del Estado. En caso de armas sin permiso, o con permisos falsificados, la confiscación será obligatoria.

Art. 31.—Cuando una persona poseedora de una licencia para portar o tener armas de fuego, municiones y fulminantes para las mismas cambie de domicilio de una Provincia a otra, notificará dicho cambio dentro de los diez (10) días siguientes al Ministerio de Interior y Policía en carta certificada, o por entrega especial y en la misma forma al Gobernador de la Provincia en la cual establezca su nuevo domicilio y al de su residencia anterior.

Art. 32.—Toda persona que llegue del extranjero con un arma de fuego y las municiones y fulminantes correspondientes

a ella sin tener la licencia, los depositará, mediante recibo por escrito, en poder del Colector de Aduana del puerto de entrada, o del oficial de aduana del puesto de entrada fronterizo o del oficial de aduana en servicio en el aerodromo de llegada, quien las entregará, también mediante recibo para su depósito, devolviéndose al dueño cuando obtenga la licencia correcta o cuando salga del territorio nacional.

PARRAFO I.—Si dicha persona desea obtener licencia para portar dicha arma, deberá hacer una solicitud por escrito en la misma forma, por los mismos trámites y con iguales requisitos y condiciones que están prescritos en esta Ley.

PARRAFO II.—Si no desea ninguna licencia o ésta no se concediere, el arma quedará bajo custodia del Ejército Nacional hasta que se saque del territorio nacional o se disponga de ella de otro modo, de conformidad con esta ley.

PARRAFO III.—La persona que llegue del extranjero, en las condiciones a que se refiere este artículo, no podrá traer más de un revólver con diez cápsulas o una escopeta con 100 cartuchos o 500 fulminantes y dos libras de pólvora y diez libras de perdigones.

PARRAFO IV.—Las personas que transitoriamente se propongan visitar el país, con el propósito de dedicarse al deporte de la cacería, deberán previamente solicitar, por vía de la Dirección General de Turismo, un permiso al Ministro de lo Interior y Policía. En la solicitud se hará constar el nombre, domicilio, nacionalidad, edad, profesión de la o las personas que vendrán al país, clase de armas que usarán número de registro de éstas, cantidad así como indicar el tiempo de permanencia en el territorio nacional, de municiones, y número de la licencia para portar dichas armas, de sus respectivos países. Tales personas deberán respetar las disposiciones de las leyes nacionales respecto a veda u otras reglamentaciones relativas a la cacería.

Art. 33.—A la salida de la República de cualquier persona cuyas armas de caza o sus municiones estuvieron bajo la cus-

todia del Ejército o la Policía Nacional, les serán entregadas a aquella mediante previa petición elevada por conducto del Colector de Aduana del puerto de salida, del Oficial de Aduana del puerto fronterizo, o del aerodromo de salida.

PARRAFO.—Si el dueño del arma a que se refiere el artículo anterior tuviera que efectuar su salida de la República por un lugar distinto al de la entrada, lo notificará con antelación suficiente al Colector de Aduana quien lo comunicará al Jefe del Ejército o de la Policía Nacional bajo cuya custodia esté dicha arma y éste la enviará al Jefe de Puesto del lugar de salida para que efectúe la entrega al dueño en la misma forma prevista en este artículo.

Art. 34.—En caso de fallecimiento o de inhabilitación física o legal del poseedor de una licencia de arma de fuego, el pariente más cercano o el representante legal o la persona que a sabiendas haya entrado en posesión del arma de fuego o de las municiones y fulminantes poseídos en virtud de dicha licencia, estará obligado a entregar los mismos inmediatamente al Jefe de Puesto del Ejército o de la Policía Nacional, en la Provincia correspondiente; y dicha arma de fuego, municiones y fulminantes serán retenidos por el Ejército o la Policía Nacional mientras esté pendiente la expedición de una licencia para las mismas, si se solicitare de acuerdo con la Ley.

Art. 35.—Toda arma de fuego, municiones y fulminantes entregadas a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley que no sean reclamadas en un plazo de treinta (30) días a partir de la entrega, se considerarán que han sido abandonadas en favor del Estado Dominicano por sus dueños. Se exceptúa de esta disposición el caso previsto por el artículo 22 de esta Ley.

PARRAFO.—Sin embargo, las empresas agrícolas e industriales, podrán depositar en los arsenales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional las armas de fuego, municiones o fulminantes utilizados por sus empleados o guardacampes- tres que hayan sido sustituidos de su labores, los cuales les serán devueltos si los reclaman en un término de treinta días,

vencido el cual se considerarán que los dueños de esas empresas los han abandonado en favor del Estado Dominicano. Igual plazo se concederá para la solicitud de la licencia prevista en el artículo anterior, de lo contrario las armas caerán dentro de las disposiciones del presente artículo.

Art. 36.—Toda persona que tenga licencia para portar o tener armas de fuego, municiones o fulminantes, estará obligada a mostrarlas siempre que se lo requiera una autoridad competente con autorización para ello.

PARRAFO.—Ninguno de los funcionarios comisionados ni agentes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, podrán ocupar, sin causa justificada, el arma a ningún funcionario o empleado autorizado al porte oficial de las mismas, ni a ninguna persona que posea una licencia debidamente registrada en el Ministerio de Interior y Policía, bajo pena de quince pesos (RD\$15.00) de multa y un mes de prisión.

Art. 37.—El Ministro de Interior y Policía llevará un registro de todas las licencias que se concedan, por orden numérico y por fecha, señalando el nombre del permisionario, las especificaciones del arma y la fecha de expedición de la licencia principalmente. En consecuencia, abrirá los libros necesarios para asentar las expediciones de acuerdo con las diversas clases de licencias y de armas; en orden cronológico y con una numeración corrida para cada una.

PARRAFO.—Este funcionario queda capacitado para adoptar todas las medidas de organización complementaria que fueron menester, para asegurar el más eficiente control y registro de las armas de acuerdo con esta Ley.

Art. 38.—Asimismo, el Ministerio de Interior y Policía dispondrá cada cuatro años, a contar de la promulgación de esta Ley, la reapertura de los libros de licencias oficiales, iniciando una nueva numeración y sustituyendo las licencias expedidas a la fecha por otras nuevas, preparadas en formularios previamente aprobados por el Presidente de la República.

CAPITULO VI

INFRACCIONES Y PENALIDADES RELATIVAS A LAS ARMAS DE FUEGO

Art. 29.—Toda persona que fabrique, reciba, compre o adquiera de cualquier modo; tenga en su poder o bajo su custodia; venda o disponga en cualquier forma; porte o use de cualquier manera, armas de fuego, o rifles de aire comprimido, sus piezas o partes sueltas y municiones y fulminantes para las mismas, en contravención a las disposiciones de la presente Ley, será inculpada en la forma más abajo indicada.

PARRAFO I.—Si se tratare de escopetas de pistón o rifles de aire comprimido, o piezas o partes de armas, o sus municiones y fulminantes, será castigada con prisión correccional de uno a tres meses o multa de diez a cincuenta pesos.

PARRAFO II.—Si se tratare de escopetas de cartucho, esto es, construídas para disparar perdigones exclusivamente con fines de caza, o partes o piezas de estas armas, o sus municiones o proyectiles, se castigará con prisión correccional de dos (2) meses a 1 (un) año o multa de cincuenta a doscientos pesos, o ambas penas a la vez.

PARRAFO III.—Si se tratare de revólver o pistolas, esto es, de aquellas armas de fuego por la que es posible obtener licencia particular para la defensa propia, o piezas o partes de estas armas, o sus municiones o proyectiles, se castigará con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años o multa de cien (RD\$100.00) a quinientos (RD\$500.00) pesos, o ambas penas a la vez.

PARRAFO IV.—Si se tratare de cualquier arma de fuego no comprendida en los párrafos anteriores, especialmente aquellas enunciadas en el párrafo II del artículo I de esta Ley, será condenada a pena de RECLUSION o multa de tres mil a cinco mil pesos, o ambas penas a la vez, según la gravedad del caso.

PARRAFO V.—Se exceptúan de la presente disposición,

las personas autorizadas por el Ministerio de Interior y Policía, que habitualmente, y como parte de su profesión, arte u oficio, se dediquen a reparar, limpiar, niquelar o pavonar armas de fuego, debiendo dichas personas llevar un registro en el cual consten el nombre, dirección y licencia del propietario, con obligación, además, de rendir un informe al titular del referido departamento gubernamental, tan pronto reciban un arma para tales fines, informe que debe contener los datos exigidos para el registro.

Art. 40.—Toda persona que negocie o trafique en armas de fuego, sus piezas o partes sueltas, o municiones y fulminantes para las mismas; o que las importe o de cualquier otro modo las adquiera o posea con la intención de negociar, o traficar con ellas en contravención a las disposiciones de esta Ley, será castigada con las penas de reclusión de dos (2) a cinco (5) años o multa de tres a cinco mil pesos, o ambas penas a la vez.

PARRAFO.— Cuando la persona que incurra en las infracciones mencionadas en este artículo pertenezca a la dotación de un barco o de una nave aérea o de cualquier clase de vehículo para carga o pasajero, se aplicará el máximo de las penas.

Art. 41.—Todo buque, embarcación, avión o vehículo de carga o pasajeros que salga del exterior para un lugar de la República, deberá declarar al Cónsul dominicano del sitio de procedencia, los nombres de aquellos miembros de su dotación que posean armas de fuego, así como el calibre, marca y número de éstas y las municiones o proyectiles correspondientes a cada una de dichas armas. Esta declaración será hecha por duplicado a fin de que el Capitán de la embarcación, o el piloto del avión o el chofer de vehículo de carga o pasajeros conserve en su poder una copia visada por el Cónsul dominicano.

Los Cónsules deberán anexar una copia de la referida declaración al sobordo de cada buque, embarcación o avión que despachen y la cual servirá para controlar cualquier inspección que se haga a bordo; en los vehículos de carga o de pasajeros lo anexarán a los manifiestos de viajes.

PARRAFO.—Si en el buque, embarcación, avión o vehículo de carga o pasajeros se encuentran armas de fuego, partes de éstas, municiones o fulminantes para las mismas que no hayan sido importadas de acuerdo con las prescripciones de esta ley o que estén fuera de la declaración prevista en el presente artículo, y no pueda determinarse la persona que haya cometido esta ocultación o importación ilegal, se hará responsable al capitán, piloto o chofer, quienes serán castigados de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos anteriores según los casos, sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse de acuerdo con el derecho internacional y la legislación interna especial sobre la materia cuando los hechos aquí incriminados constituyan un contrabando de guerra.

Art. 42.—Los armadores y los empresarios y consignatarios son responsables para el pago de las multas en que, por infracción de esta Ley, incurran los miembros de las dotaciones de sus barcos, aviones o vehículos de carga o de pasajeros. Para garantizar este pago quedará afectado el vehículo en el cual haya ocurrido la infracción.

Art. 43.—Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos a toda persona que recorte o haga recortar carabinas, escopetas, rifles y cualquier otra clase de armas de fuego; o que coopere en tales operaciones o proporcione los medios para ejecutarlas; o que tuviere en su poder, oculte o conduzca armas así modificadas; o que, de manera general, haya facilitado o ayudado a la comisión de este crimen. En estos casos el Tribunal ordenará siempre la confiscación de las armas.

PARRAFO.— Con igual pena se castigará a toda persona que modifique, arregle o prepare objetos, cosas o artículos de uso común y corriente, en forma que puedan disparar proyectiles por medio de pólvora o de cualquier otro explosivo; o que tuviere en su poder, venda, oculte o conduzca los objetos, cosas o artículos así preparados.

Art. 44.—El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 34 de esta Ley dará lugar, contra los in-

fractores, a las sanciones establecidas en el presente capítulo, según los casos.

Art. 45.—Igualmente, la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 31 se castigará contravencionalmente con la pena de cinco días a tres meses de prisión o de cinco a cincuenta pesos de multa, o ambas penas a la vez.

Art. 46.— Los Jueces podrán ordenar la incapacidad de la persona o personas que resultaren culpables de los delitos previstos por esta Ley, para obtener licencias para comerciar, tener o portar armas por un período entre uno y cinco años, El tribunal, por la vía correspondiente, notificará su decisión al Ministerio de Interior y Policía para su debido cumplimiento.

PARRAFO.—Asimismo, el Juez podrá ordenar la compensación de las multas a razón de un día de prisión por cada peso no pagado sin que dicha prisión pueda ser disminuída por causa de insolvencia ni por ninguna otra causa, ni exceder de dos años.

Art. 47.— Toda persona que resultare cómplice en la comisión de los delitos previstos por esta Ley, será castigada con las mismas penas que el autor o los autores del hecho.

Art. 48.— En todos los casos la reincidencia se castigará con el máximo de las penas.

Art. 49.—Todas las sanciones establecidas anteriormente serán aplicadas sin perjuicio de aquellos en que pueda incurrir el inculpado por otros hechos punibles cumplidos por él correlativamente con aquellos incriminados por esta Ley.

CAPITULO VII

DE LAS ARMAS BLANCAS, PUNZANTES Y CONTUNDENTES.

Art. 50.— Se prohíbe a toda persona portar en cualquier forma cortap'umas, navajas, sevillanas, estoques, puñales, es-

tiletes, verduguillos, dagas, sables, espadas, o cualesquiera otra clase de instrumentos afiliados o con punta cuyas dimensiones excedan de tres pulgadas de largo por media pulgada de ancho.

Art. 51.—Se exceptúan de esta prohibición:

a) Las autoridades militares y policiales, en cuanto a las armas de reglamento;

b) Las autoridades rurales, en cuanto al porte de machetes y puñales, siempre que no hayan sido provistas de armas de fuego, de acuerdo con esta Ley;

c) Los Guardacampestres, dentro de las fincas confiadas a su vigilancia y defensa; y

d) Los ayudantes de las autoridades policiales, inclusive las rurales, mientras estén desempeñando los servicios que éstas les hubieren confiado y siempre que lleven consigo un permiso de la autoridad que les ordenó dichos servicios.

Art. 52.—Se exceptúan respecto a cortaplumas, navajas, sevillanas o cuchillos las personas que en razón de su oficio, profesión o arte tengan necesidad de usar tales objetos. Podrán sin embargo portarlos y usarlos únicamente en y durante se encuentren ejerciendo las faenas de su oficio, profesión o arte.

Art. 53.— Es entendido que los machetes y cuchillos de trabajo no se incluyen en la prohibición establecida por esta Ley, no pudiendo ser perseguidos o sometidos a la justicia los individuos que porten dichos instrumentos.

Art. 54.— Las personas que de acuerdo con las excepciones establecidas en los párrafos c) y d) del artículo 51 y en los artículos 52 y 53 de esta Ley estén facultadas para portar las armas o los instrumentos enunciados en los mismos, no podrán llevar tales armas e instrumentos en reuniones o actos públicos, ni transitar por las calles portándolos o llevándolos sino cuando justifiquen de una manera notoria y evidente que les eran necesarios para sus faenas habituales.

Art. 55.—Se prohíbe la introducción y la fabricación de puñales, estoques, estiletes, verduguillos y toda clase de instrumentos cortantes, punzantes o contundentes, que sólo sean destinados al uso por particulares, salvo los que se introduzcan o fabriquen para el uso de las Fuerzas Armadas.

Art. 56.—Cualquiera persona que portare alguna de las armas o algunos de los instrumentos cuyo porte prohíbe el presente capítulo, salvo en los casos que el mismo exep^túa, será castigada con multa de venticinco a trescientos pesos o prisión de uno a seis meses. En estos casos las armas o los instrumentos se ocuparán y confiscarán, sin perjuicio de penas más graves para las personas que resultaren autoras o cómplices de delitos cometidos con dichas armas o instrumentos.

PARRAFO.— En la misma pena incurrirá todo el que venda, introduzca o fabrique cualquiera de las armas o instrumentos prohibidos por el artículo 55 de esta Ley.

Art. 57.— Las autoridades judiciales o policiales ocuparán y destruirán, en donde quiera que estuvieren o fueren encontradas, los puñales, estoques, verduguillos, estiletes y todas clases de instrumentos cortantes, punzantes o contundentes que sólo sean destinados a usarse contra las personas.

PARRAFO.— Se atribuye competencia a los Juzgados de Paz para juzgar y fallar las infracciones por porte, introducción, fabricación y venta de armas blancas, punzantes y contundentes.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 58.—Las armas que se incauten a los contraventores de esta Ley, y cuya destrucción o confiscación no esté expresamente dispuesta, serán remitidas al Intendente General del Material Bélico de las Fuerzas Armadas, quien la remitirá a los depósitos de armas de la Intendencia de Material Bélico del Ejército Nacional.

PARRAFO.— De igual modo caerán bajo las disposiciones de presente artículo, todas las armas y municiones para las mismas introducidas al país o puestas a la venta, cuya legítima procedencia no se estableciere al ser requerida por las autoridades competentes, o al tratar de obtenerse la licencia correspondiente para la venta, porte o tenencia de las mismas.

Art. 59.— Los impuestos y las condenaciones pecuniarias que se consignan en esta Ley, se considerarán rentas públicas; y en consecuencia, los Inspectores de Rentas Internas, los funcionarios o agentes policiaes, nacionales o municipales, y cuantos deban legalmente cuidar por la fiel recaudación de las rentas nacionales, velarán por la ejecución de las previsiones de esta ley, ya actuando directamente, ya elevando ante quien sea de derecho las denuncias correspondientes, según las facultades legales de que se hallen investidos, remitiendo siempre una copia de sometimiento al Procurador General de la República y otra al Director General de Rentas Internas.

Art. 60.— El Ministro de lo Interior y Policía podrá establecer Comisiones cuya misión será la de depurar las solicitudes de licencia para fines de porte o tenencia de armas de fuego, las cuales determinarán, en cada caso, si el solicitante reúne las condiciones requeridas por la presente Ley para que se le pueda expedir la licencia.

Art. 61.— Se dispone, por medio de la presente Ley, que las personas de la clase civil cuyas funciones no lo exijan, no podrán llevar consigo armas de fuego en sitios de diversiones ni en reuniones públicas.

PARRAFO.— La violación de la presente disposición será sancionada de acuerdo con las disposiciones del Párrafo III del artículo 39 de esta Ley.

Art. 62.— Las violaciones a cualquier disposición de la presente Ley no sancionada expresamente, se castigará con multa de cincuenta a cien pesos o prisión de tres (3) a seis (6) meses o ambas penas a la vez.

Art. 63.— La presente Ley deroga y sustituye la Ley número 392, fecha 20 de septiembre de 1943, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, así como toda otra disposición legal que le sea contraria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A partir de la publicación de la presente Ley, quedan canceladas todas las licencias para el porte y tenencia de armas de fuego, tanto oficiales como privadas. Los interesados deberán presentarse personalmente por ante el Gobernador Civil del lugar de sus respectivas provincias a depositar sus licencias a fin de que sean enviadas al Ministerio de lo Interior y Policía, donde se procederá a cambiarlas por nuevas licencias, sin costo alguno para dichos interesados. Junto con las licencias deberán entregarse dos fotografías tamaño 2x2, tomadas de frente, actualizadas. Las personas que residan en el Distrito Nacional se presentarán directamente al Ministerio de lo Interior y Policía para realizar el cambio.

Las armas quedarán en poder de sus poseedores, quienes no podrán hacer uso de ellas hasta tanto reciban la nueva licencia.

Las autoridades militares, policiales y judiciales procederán a confiscar las armas de aquellas personas que no cumplan con la presente disposición en un plazo de 15 días a contar de la fecha de publicación de esta Ley.

El Ministerio de Interior y Policía publicará avisos en la prensa y en la radio solicitando la entrega voluntaria de las armas ilegalmente en poder de particulares. En dichos avisos podrá ofrecer una compensación en dinero efectivo a las personas que posean armas indebidamente y las entreguen de manera voluntaria. La compensación tendrá lugar de acuerdo con una tarifa elaborada por dicho Ministerio, en la cual se tomarán en cuenta las condiciones físicas actuales de las armas entregadas y el valor en fábrica de las mismas. En el Distrito Nacional, la entrega deberá ser hecha en el Ministerio de Interior y Policía y en las Provincias en manos del Gobernador correspondiente.

Las autoridades militares, policiales y judiciales, deberán proceder de inmediato, en todo el territorio nacional, a la recolección de armas de toda especie que se encuentren en poder de particulares, sin sus respectivos permisos. Al efecto, tan pronto como dichas autoridades se enteren de la existencia de tales armas en determinados lugares o en poder de señaladas personas apoderarán a los funcionarios competentes para que realicen las medidas judiciales de lugar. También pueden dichas autoridades, previamente a cualquier otra medida montar guardia y mantener en estrecha vigilancia los lugares sospechosos, a fin de prevenir o evitar el desplazamiento o traslado de las armas a otros lugares, antes de que se proceda a los allanamientos ó a tomar las medidas que fueren pertinentes. El Ministerio Público podrá actuar en tales casos por querrela, denuncia, notoriedad pública, y aún de oficio.

DADA Y PROMULGADA en el Palacio Nacional, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de Octubre del año mil novecientos sesenta y cinco (1965), años 122º de la Independencia y 103º de la Restauración.

Publíquese en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

HECTOR GARCIA GODOY

Ley Nº 36-bis, que ordena transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1965.

(G. O. Nº 8953, de 31 de Octubre de 1965)

HECTOR GARCIA GODOY

Presidente Provisional de la República Dominicana

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 36 (bis)

ARTICULO UNICO.— Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1965: